

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por el C. Lic. Juan M. Márquez, contra la orden de la Corte de Justicia de ese Estado, que lo destituyó del cargo de Juez interino de 1ª instancia de Nochistlan.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito: El Promotor fiscal dice: que el C. Lic. Juan M. Márquez, fue nombrado Juez interino del Partido de Nochistlan, por el Superior Gobierno del Estado, en virtud de la facultad que le concede la fraccion 4ª del artículo 61 de la Constitucion particular del mismo Estado.

El Lic. Márquez entró efectivamente a funcionar en el cargo referido, hasta que el Superior Gobierno, en acuerdo de 28 de Mayo próximo anterior, y segun el mismo dijo, por causa del mejor servicio público, revocó el de 7 de Febrero último por el cual el quejoso habia sido nombrado Juez interino de Nochistlan, y concedió el empleo mencionado al C. Lic. Francisco Cortés.

Tales son los hechos que aparecen de las piezas justificativas que acompañó a su informe la Corte de Justicia del Estado, ejecutora inmediata del acto que se reclama.

El C. Lic. Márquez, cree violadas, por la remocion gubernativa del empleo que ejercia, las garantías que otorgan los arts. 14, 16 y 21 de la Constitucion general de la República, y se funda en que la remocion ó destitucion de empleo, es una pena que únicamente se puede imponer por la autoridad judicial, conforme al artículo 82 de la Constitucion del Estado y á la ley de responsabilidades de 27 de Abril, y no de 13 de Setiembre de 1858.

Desde luego observa el Ministerio fiscal, que la revocacion del acuerdo en que fuera nombrado el C. Lic. Márquez Juez interino

de Nochistlan, no se fundó en falta ó delito de que se supusiera reo al quejoso, sino en consideraciones de pública utilidad, motivadas por la discordia y animosidad que habian estallado entre el C. Lic. Márquez, Juez interino de Nochistlan, y el Gefe político de allí mismo.

Una pena, para ser impuesta y para que rigurosamente se tenga por tal, es preciso que recaiga á una declaracion de culpabilidad, respecto de algun hecho criminoso. Si esa declaracion no ha intervenido, na habrá pena ciertamente, y será ó no vejada en sus derechos la persona que reporte la providencia reclamada, segun como ésta se haya dictado.

Cuestion será esta, que el infrascrito tratará en seguida respecto del C. Lic. Márquez, estableciendo por ahora que supuesto que el Superior Gobierno del Estado no se aventuró á conocer de la acusacion intentada contra el quejoso, ni lo declaró culpable de falta, crimen ó delito, no fueron violadas las garantías que otorgan los arts. 14 y 21 de la Carta federal.

No basta, en efecto, que se cause á alguno un mal ó perjuicio, para que pueda decirse, jurídicamente hablando, que se le impuso una pena; por que ésta, segun la usual definicion, es un mal que la ley hace al delincuente, por un mal que él ha hecho con su delito. Donde, pues, no ha habido acusacion, ni conocimiento de causa, ni declaracion de culpabilidad, no ha sido juzgado ni sentenciado el C. Lic. Márquez, caso del art. 14, ni se le ha impuesto pena verdaderamente tal, caso del 21, á los que el reclamante se ha acogido.

El promovente invoca tambien el art. 16 de la Constitucion general. En el se establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Ahora bien. ¿El acuerdo del Superior Gobierno del Estado que revocó el nombra-

miento hecho anteriormente en el C. Lic. Juan M. Márquez, atacó la persona de éste, su familia, papeles ó posesiones? No la persona, por que esta no se entiende molestada sino cuando lo es inmediata y directamente. Por ejemplo: con la prision ó captura á que es relativa la parte final del espresado art. 16, nada tiene que ver el caso debatido, con la familia, papeles ni domicilio del quejoso. Solo restan las posesiones.

Si los empleos fueran hoy, como en otro tiempo, propiedad de los agraciados, pudiera sostenerse con apariencias de razon, que suspender ó destituir á un empleado, seria atacar á sus *posesiones*. Pero no, C. Juez: en el dia los empleos son cargos públicos y no propiedad particular; y seria preciso forzar la inteligencia de la palabra *posesiones*, para que se entendiera comprendido en ellas un empleo público.

El empleo, dice el quejoso, su concesion y remocion de el, constituyen para el empleado derechos consignados en la Constitucion particular del Estado, y que esos derechos han sido desconocidos y violados en su persona. Aun suponiéndolo así por un momento: ¿acaso por ello tendrá lugar la violacion de las garantías consignadas en el repetido art. 16?

La palabra *posesiones* tiene un sentido tan propio, tan estricto, que concedida la legalidad de los procedimientos del Ejecutivo del Estado, no se podría jamás sostener que el Lic. Márquez habia sido molestado en sus posesiones, por habérsele removido de su empleo.

El Estado de Oaxaca tiene leyes, tiene Tribunales para juzgar á sus altos funcionarios cuando violan su constitucion particular; ¿por qué ocurrir, valiéndose de amplias interpretaciones, á los Tribunales de la Federacion, suministrando un pretexto para que se mezclen en los negocios de un Estado, atacando su Soberanía?

Llega ya el momento de tratar la cuestion antes enunciada, de si la remocion del

Lic. Juan Miguel Márquez, fué legítimamente acordada por el Superior Gobierno del Estado. Protesta el Ministerio fiscal que no es su ánimo ingerirse en negocios enteramente reservados á los Estados; pero cree oportuno tocar, si bien someramente, la cuestion, para fundar la notoria incompetencia en el caso, aun por via de amparo de la Justicia Federal.

El art. 61 de la Constitucion del Estado en su fraccion 4ª, facultó al Ejecutivo para nombrar Jueces interinos en las faltas absolutas de los electos popularmente, mientras se proceda á nueva eleccion. En primer lugar, al Ministerio fiscal no le parece muy clara la manera con que ese artículo está redactado. ¿Es en efecto su sentido, que nombrado un Juez interino éste continúe en su encargo hasta nueva eleccion popular, ó bien que el Gobierno tendrá espedita su facultad de nombrar Jueces interinos cuantos quiera, mientras la eleccion popular no designe al propietario?

En segundo lugar, la fraccion 3ª del mismo art. 61, concede amplia libertad al Gobierno del Estado para nombrar y remover libremente ó con motivo justo, á los empleados cuyo nombramiento ó remocion no estuvieren de otro modo determinados en la Constitucion ó en las leyes; ¿y cabe grave duda respecto de si los Jueces interinos estan comprendidos en el artículo 82 de la Constitucion particular, por que ese artículo debe ser combinado con la fraccion 4ª citada del referido art. 61, segun la cual, la facultad concedida al Gobierno del Estado para nombrar Jueces interinos, puede dubitativamente entenderse, como se ha visto, para nombrarlos, mientras no tenga verificativo una nueva eleccion popular, ó como muy restricta en el sentido de que una vez nombrado un interino, será éste inamovible hasta nueva eleccion popular?

Es tal la estrecha relacion entre ambos textos constitucionales, que el uno debe interpretarse por el otro, y que serian casos

de escepcion al art. 82; precisamente aquellos á quienes se refiera la fraccion 4ª citada.

En tercer lugar, esa misma duda está diciendo, que para fallar en sentido favorable al C. Lic. Márquez, seria preciso que la Justicia federal se entrometiera á interpretar la constitucion del Estado.

¿Es esto posible, legal, procedente?

Si la incompetencia que dictara el acuerdo que removió al C. Lic. Márquez, fuera notoria, palpable, visible, por decirlo así, el art. 16 de la Constitucion de la República pudiera tal vez tener aplicacion. Pero para calificar esa incompetencia, seria preciso buscar y rebuscar en la Constitucion del Estado y en las leyes, aventurándose á interpretarlas con mas ó menos fundamento, con mas ó menos apariencias de razon; desde luego alzaría el grito la opinion pública, acusando á la Justicia Federal de mezclarse en los negocios interiores de un Estado, y de atacar su Soberanía.

El pacto de la union entre los Estados Mexicanos, los aseguró plenas facultades para todo lo relativo á su régimen interior; y si bien la Justicia federal está encargada de proteger á aquellos cuyas garantías individuales fueren violadas, y de evitar las usurpaciones de los Estados sobre la federal, segun las fracciones 1ª y 3ª del artículo 101 de la Constitucion de la República, no es menos cierto que debe proteger á las autoridades de los Estados, cuando se intenta vulnerar su Soberanía por leyes ó actos de la autoridad federal; así se encuentra consignado en la fraccion 2ª del art. 101 citado, que ha reproducido literalmente el art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Concluye el Ministerio fiscal, con apoyo de lo espuesto, solicitando se declare, que a Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Lic. Juan M. Márquez, contra el acto que reclama.

Oaxaca de Juarez, Junio 30 de 1874.—
José María Ballesteros.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Oaxaca de Juarez, Julio 14 de 1874.—
Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Lic. Juan M. Márquez, contra la orden que dictó la Corte de Justicia del Estado, destituyéndolo del Juzgado de 1ª instancia del partido de Nochistlan, por considerar violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 14, 16 y 21 de la Constitucion federal. Visto el informe de la autoridad ejecutora del acto, en que manifiesta, que el Gobierno del Estado, en uso de la facultad que le concede la fraccion 4ª del artículo 61 de la Constitucion particular, nombró al Lic. Márquez, Juez interino de 1ª instancia de Nochistlan, y despues usando de la autorizacion que tambien le concede la fraccion 3ª del artículo y Código citados, revocó, por causa de interes público, aquel nombramiento y confirmó el empleo al C. Lic. Francisco Cortés; que habiendo tenido aviso oficial de la revocacion y presentándose al Juez nuevamente nombrado, se le recibió la protesta legal, y se expidió la orden para la entrega del Juzgado; que para proceder de esta manera no tuvo otra consideracion, sino la de que, por el hecho del nuevo nombramiento, el C. Lic. Márquez, tuviera aviso de quien era la persona que lo remplazaba, el Juzgado no quedara acéfalo; que era preciso reconociendo los hechos y sin otro antecedente, cubrir la plaza, para que la Administracion de Justicia no sufriera perjuicio; que el artículo 74 de la ley de 27 de Abril de 1858, impone graves penas al funcionario público que continué ejerciendo su empleo, despues de constarle oficialmente su separacion, suspension ó remplazo, y además declara nulo todo lo que ejecute; por lo que el Lic. Márquez, luego que tuviese noticia del nuevo nombramiento, debía separarse del Despacho del Juzgado, tanto para no incurrir en tales penas, como para no dar lugar á la nulidad de sus actos; que la Corte, segun el aviso del Gobierno, debía

su separacion, suspension ó reemplazo, y además declara nulo todo lo que ejecute; por lo que, el Lic. Márquez, luego que tuviese noticia del nuevo nombramiento, debía separarse del despacho del Juzgado, tanto para no incurrir en tales penas, como para no dar lugar á la nulidad de sus actos; que la Corte, segun el aviso del Gobierno, debía suponer que la separacion de aquel letrado se verificaría sin escusa, aún antes de que el nuevo Juez se presentara á recibir el Juzgado, por lo que no debió suspender la protesta y la orden de entrega; que en consecuencia, la Corte de Justicia no fué la que hizo efectiva la separacion del Lic. Márquez, sino la ley, en virtud del nuevo nombramiento; por cuyo motivo no se considera ejecutoria del acto reclamado, ni cree que lo comprenda la obligacion de informar; pero que lo hacia, supuesto que este Tribunal creyó que debía cumplir con ese deber. Vistos los expedientes que en copia certificada acompaña á su informe la Corte de Justicia, en los cuales aparece:

Primero: que en Febrero del corriente año, el Gobierno del Estado, en uso de la facultad que le concede la fraccion 4ª del artículo 61 de la Constitucion, nombró al C. Lic. Márquez, Juez interino de 1ª instancia de Nochistlan.

Segundo: que hizo la protesta legal y se encargó del despacho del Juzgado en el mismo mes.

Tercero: que el 28 de Mayo último, el Gobierno del Estado, en virtud de no considerar conveniente la subsistencia del Juez y del Gefe político de Nochistlan en la misma jurisdiccion, por haberse promovido entre ellos enojosas diferencias y concentrados odios, revocó el acuerdo por el que habia nombrado Juez interino de Nochistlan al Lic. Márquez, nombrando con ese mismo carácter al Lic. Francisco Cortés.

Cuarto: que el Lic. Cortés despues de haber hecho la protesta legal ante la misma Corte de Justicia, se le expidió la ór-

TOMO VI.—PARTE II.

den de entrega que presentó al Lic. Márquez, quien le dió cumplimiento, protestando á salvo sus derechos para hacerlos valer ante quien corresponda. Visto el pedimento fiscal, lo alegado por el interesado y cuanto de autos fué necesario tener presente.

Considerando: Que la fraccion 3ª del art. 61 de la Constitucion del Estado, facultó al Gobierno para nombrar y revocar, con motivo justo, á los Gefes políticos y á otros empleados, cuyo nombramiento ó remosion no estén determinados de otro modo en la Constitucion ó en las leyes; que la fraccion 4ª del artículo citado, lo autoriza para nombrar Jueces interinos en las faltas absolutas de los electos popularmente, mientras se procede á nueva eleccion.

Considerando: Que si bien el Gobierno del Estado nombró legalmente al C. Lic. Juan M. Márquez, Juez interino de Nochistlan, no estaba autorizado para removerlo de su empleo por medio de un acuerdo, puesto que el art. 82 de la Constitucion particular, dispone que los empleados del ramo judicial ejerzan su encargo mientras tengan buena conducta, y que en ningun caso sean depuestos temporal ó perpetuamente, sino por sentencia de Tribunal competente, ni suspendidos, sino por acusacion legalmente intentada.

Considerando: Que de autos consta plenamente justificado, que el Lic. Márquez fué nombrado Juez interino, y previos los requisitos legales entró en posesion de su empleo; que el Gobierno revocó este nombramiento por medio de un acuerdo, y confirmó el empleo, con el mismo carácter de interino, al C. Lic. Francisco Cortés; que comunicó este acuerdo á la Corte de Justicia, quien, reconociendo los hechos y sin otro antecedente, recibió la protesta legal al nuevo Juez nombrado, y expidió la orden para que se le hiciera entrega del Juzgado.

Considerando: Que si bien es cierto que, segun el espíritu de la Constitucion federal, no hay propiedad en los empleos, tambien

lo es, que en casos como el presente estan exceptuados los que tengan tiempo determinado para el desempeño; que segun el art. 85 de la ley del Estado de 6 de Noviembre de 1857, reglamentaria del 81 de la Constitucion, que manda que cada dos años se hagan elecciones de Jueces de 1ª instancia, dispone que esta eleccion se verifique el próximo domingo de Diciembre, y que los electos entren á funcionar el 1º de Febrero del año siguiente; que segun esa determinacion y lo prevenido en la fraccion 4ª del art. 61 de la Constitucion, el Juez interino debe permanecer en el ejercicio de su encargo hasta nueva eleccion; que para removerlo, no basta el acuerdo del Gobierno, sino que es preciso que se verifique la remocion, del modo que establece el artículo 82 citado.

Considerando: Que la privacion de oficio, es una pena grave que menoscaba la estimacion del hombre ó el concepto de que gozaba en la sociedad, como lo reconocen varias disposiciones legales, entre ellas la ley de 3 de Noviembre de 1870; que asi mismo es considerada por la antigua legislacion y por los tratadistas mas usuales, (Cédula de 29 de Enero de 1777, recopilada por Beleña, prov. núm. 93, ley 4 tit. 31 Part. 7ª. Febrero de Pascua, tomo 7º página 46. Escribido adicionado por Guin página 1339.)

Considerando: Que para la imposicion de esta pena, debo proceder la formacion de una causa, otorgándose al responsable las garantías del art. 20 de la Constitucion federal; que esta facultad es exclusiva de la autoridad judicial, por cuyo motivo el Gobierno del Estado es á todas luces incompetente, y al imponerla, ha violado la garantía que otorga el art. 21 del Código citado.

Considerando: Que el art. 16 del mismo Código, manda que nadie pueda ser molestado en su persona, familia, papeles y posesiones, sino por mandato escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; y en el pre-

sente caso, segun el art. 82 de la Constitucion local, el Gobierno no es el competente para remover un empleado judicial, y es además gravosa y perjudicial al C. Márquez, la remocion acordada.

Considerando: Que no es verdad, jurídicamente hablando, que puedan revocarse los acuerdos del Ejecutivo que han dado derechos y creado esperanzas, por que en este caso, la sociedad entera estaria sujeta á las versatilidades de la autoridad pública, llegando el extremo de que pudieran ponerse en duda los títulos legítimos del poder, una vez que fuera posible su revocacion.

Considerando: Que es deber de la justicia federal, cuando sea requerida al efecto por parte legítima, averiguar si es competente la autoridad que impone penas, por que de otra manera seria ilusoria la garantía que á los habitantes de la República otorga el citado artículo 16 de la Carta fundamental.

Considerando: Que ninguna de las razones que alega en su informe la autoridad ejecutora del acto, puede fundar la legalidad de su procedimiento; que no es la ley, como pretende, la que hizo efectiva la separacion del C. Márquez, del Juzgado de Nochistlan, por que ni tal disposicion existe en el Estado, ni aun en el supuesto de que existiera podia tener lugar su aplicacion, por que se opondria al art. 21 de la Constitucion federal, que es la ley Suprema de la Nacion, que solamente declara en su artículo 1º, que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que ella otorga; que en el presente caso, la Corte de Justicia del Estado fué la autoridad que inmediatamente ejecutó el acto reclamado, y por lo mismo, conforme al art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, está en el deber de rendir el informe que este Tribunal le pidió.

Con fundamento de lo prevenido en los arts. 101 y 102 de la Constitucion y fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, la Justicia Federal ampara y

protege al C. Lic. Juan M. Márquez, contra la orden que dictó la Corte de Justicia del Estado, destituyéndolo del Juzgado de 1ª instancia de Nochistlan, que servia en calidad de interino, por haber violado en su persona las garantías que otorgan los arts. 14, 16 y 21 del pacto fundamental de la República.

Hágase saber; publíquese y elévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia, para su revision.

El C. Juez propietario de Distrito, lo sentenció y firmó. Doy fé.—*Pedro Pardo*.
—*Manuel Galindo*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 13 de 1874.—Visto el amparo promovido por el C. Lic. Juan M. Márquez, ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, contra la orden de la Corte de Justicia del Estado, que lo destituyó del cargo de Juez interino de 1ª instancia de Nochistlan, con cuyo acto reputa violadas el quejoso en su persona, las garantías que reconoce la Carta fundamental de la República, en sus artículos 14, 16, y 21. Visto el informe que el mismo Tribunal produjo, exponiendo: que la orden la dictó el Gobernador del Estado, por causa de interés público y en uso de las facultades que le concede la fraccion 3ª del artículo 61 de la Constitución del Estado, habiendo hecho el mismo Ejecutivo el nombramiento del C. Márquez.

Visto el pedimento del C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior otorgando el amparo; y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente.

Considerando: que si bien es cierto que la fraccion 3ª del artículo 61 de la Constitución particular del Estado, faculta al Ejecutivo del mismo para remover libremente á los empleados, cuya remocion no esté determinada de otro modo en la misma

Constitucion ó en las leyes, tambien lo es que la referida Constitución en su artículo 82 determina, que en ningun caso serán de puestos temporal ni perpetuamente los empleados del ramo judicial, mientras tengan buena conducta, y solo por sentencia de Tribunal competente y por acusación legalmente intentada.

Que estando por lo mismo, determinado el modo de remover á dichos empleados, no se debe comprender la facultad que el Ejecutivo alega en su favor, como sentencia á ellos.

Que en consecuencia, no siendo competente la autoridad ejecutora del acto de que se queja el promovente, se han violado los artículos citados de la Constitución particular del Estado, y tambien los expresados de la Constitución federal, que en su favor invoca el quejoso.

Por estos fundamentos y con apoyo de los artículos 14, 16, 21, 101 y 102 constitucionales, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juzgado de Distrito de Oaxaca, que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Juan M. Márquez, contra los procedimientos de que se queja.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias*.—*Miguel Auza*.—*José María Lozano*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramírez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*Simon Guzman*.—*M. Zavala*.—*José García Ramírez*.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 18 de 1874.—*Enrique Landa*.